

Auto de revision de la primera Sala de la Corte de Justicia.

México, Abril, diez y siete de mil ochocientos setenta y uno.

Por revisada, y no apareciendo méritos para la responsabilidad, devuélvase las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*José M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias, México, Abril veintinueve de mil ochocientos setenta y uno,—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido por los defensores de José Emilio Reynoso, ante el Juegado de Distrito de esta capital, por violacion de garantías individuales.

SENTENCIA DEL JUEZ 1º DE DISTRITO, NEGANDO LA ENTRADA AL RECURSO.

México, Abril diez de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el anterior escrito, y teniendo en consideracion que la ley de 13 de Abril del año anterior de 1870, suspendió las garantías otorgadas por los artículos 20 y 21 de la Constitucion federal, determinando ademas, que el plagio está comprendido en los delitos por los que aplica la pena de muerte el artículo 23 de aquella; que siendo los artículos citados los que se dicen violados en la persona de José Emilio Reynoso; que la ley citada es general y por ella ha sido juzgado aquel; que cometido el delito, juzgado y sentenciado Reynoso en el tiempo que ha estado vigente la ley, esta no puede decirse que ha caducado, pues la suspension de la ejecucion de la pena, ha tenido lugar en beneficio del reo, sin que por

derecho surta mas efectos que los que quiso darle la ley de 20 de Octubre del año anterior; que por lo mismo, no existiendo ni violacion presunta de garantías, no es de accederse á la suspension que se solicita; por todo lo expuesto, y con fundamento de la ley expresada y artículo 6º de la de 20 de Enero del año de 1869, se declara: que no ha lugar á suspender la ejecucion de la pena impuesta á José Emilio Reynoso, por el C. Gobernador del Distrito federal, por el delito de plagio. Así lo mandó y firmó el C. Juez primero de Distrito, Lic. José Isaac Sancha, á las diez de la noche: doy fé.—*J. I. Sancha.*—*Joaquín Sanchez Gonzalez*, secretario.

Es copia que certifico. México Abril doce de mil ochocientos setenta y uno.—*Joaquín Sanchez Gonzalez*, secretario.

Auto del Juez 2º de Distrito, dando entrada al recurso.

México, Abril once de mil ochocientos setenta y uno.

En vista del anterior escrito, y en atencion á que si bien la ley de 9 de Abril de 1870, en virtud ó con fundamento de la cual se ha pronunciado sentencia de muerte por delito de plagio contra el reo Emilio Reynoso, expresamente suspende las garantías que otorga la Constitucion en sus artículos 20, 21 y 23, por lo que competente-mente y sin que hubiera lugar al juicio de amparo debería llevarse á efecto la determinacion dictada por el C. Gobernador de Distrito, la autoridad aprehensora en el caso, artículo 3º, deben sin embargo tenerse presentes en cuanto á la suspension que se solicita:

Primero. que esta no implica la concesion del amparo ni el que por consiguiente deje de ejecutarse el fallo que legalmente y sin violacion de garantías se haya pronunciado.

Segundo: que siendo la ejecucion de la pena un acto que trae extrictamente gravamen irreparable, es de comprenderse en el artículo sexto de la ley de 20 de Enero de 1869. y

Tercero: que en el presente caso hay la circunstancia particular de que el escrito de quejas se há presentado cuando ya rige la expresada ley de 9 de Abril, y la ejecucion de la pena señalada al reo debe verificarse ya en pleno goce de las garantías constitucionales que aquella ley habia suspendido, lo que aun dudoso que fuera en cuanto á si debia ó no entenderse como violacion de garantías tal acto, tratandose como se trata de lo mas sagrado, que es la vida, seria de optarse por la parte favorable:

Por tales razones, pues, y teniendo presente la facultad que otorga el artículo 5º de la ley organica de 20 de Enero de 1869.

Se declara: que ha lugar á la suspension de la pena señalada al reo Emilio Reynoso, y la cual debe ejecutarse en le angustiado término de cuatro horas, contadas desde la presentacion del escrito que antecede. Hagase en consecucionia saber al Gobernador del Distrito federal, ó en su defecto á la autoridad inmediatamente ejecutora del acto, y hecho, trascribase el escrito de queja al expresado Gobernador, á fin de que con arreglo al artículo 9º de la citada ley de 20 de Enero, informe con justificacion, en el término de tres dias.

Lo proveyó y firmó el C. Juez 2º de Distrito, Lic. José M. Canalizo: doy fé —(Firmado.)—*José M. Canalizo.*— Por el C. secretario,—*Manuel M. de Chavero*, escribano público.

Pedimento del C. Promotor fiscal del Juzgado 2º de Distrito.

C. Juez.—El Promotor dice: que el C. Lic. Juan José Baz, como defensor del reo

José Emilio Reynoso sentenciado á la última pena por el delito de plagio, ha interpuesto el recurso de amparo contra la sentencia pronunciada por el C. Gobernador del Distrito, que lo juzgó conforme á la ley de nueve de Abril del año próximo pasado, por considerar violadas en su persona, con la ejecucion de esa sentencia y el juicio relativo, las garantías que otorga la Constitucion general de la República en los artículos 20, 21 y 23, que se refieren á los derechos del hombre. La gravedad del presente caso es indudablemente de tal naturaleza, que se necesita consagrar la mayor atencion y recogimiento del espíritu, pues que se trata de la vida de un hombre, para examinar, si tanto en el procedimiento como en la sustancia de la misma materia, objeto de la determinacion que motiva, ó en el que se espone al interponer el amparo, se han guardado las ritualidades prescritas por la ley y acatado los preceptos constitucionales, ó algunos de ellos se han vulnerado con peligro inminente de la vida del hombre por quien se implora el amparo del Código fundamental, que garantiza todós los derechos.

Atendidas estas circunstancias, el que suscribe ha puesto todo el cuidado de que se considera obligado por sus sentimientos individuales y el deber de la acerva mision que en el presente caso le está encomendada, para estender el pedimento que le corresponde de la manera que pueda evitar el extravio del ánimo del C. Juez en la resolucion que haya de dar, dejando sin esa intranquilidad que experimenta la conciencia cuando una necesidad suprema exige dictar alguna resolucion severa y justa al mismo tiempo.

Gravisimo bajo todos aspectos es el caso en cuestion, y por tanto exige que para cuando llegue el momento de que la superioridad tenga que examinar todas las circunstancias antes de decretar su acuerdo supremo, cualquiera que sea la resolucion que el C. Juez adopte en vista de las constancias todas del expediente remitido por el C. Go-

bernador del Distrito al evacuar su informe, y de los términos en que está concebido el recurso en que se interpone el amparo, hay que notar que en la averiguación practicada por la autoridad aprehensora del C. José Emilio Reynoso, se omitió recoger la carta en que se pedía al C. Manuel Mangino el rescate de su hijo, así como el papel de las proposiciones no que la señora su mujer D^a Octaviana, daba instrucciones á su hermano Emilio para hacer una especie de capitulación con los plagiarios de su niño, así como también, se extraña que no se hubiera evacuado alguna de las diligencias indicadas que se hacen en la cita de un tal Belfort, de la casa núm. 2 del callejon Betlemitas en donde se entregó el niño Manuel Mangino á su padre, según se expresa en una de las declaraciones que obran en esa averiguación. Si la carta de denuncia del plagio se hubiera registrado y agregado á la averiguación, con el cotajo de letra que era consiguiente, y la exhibición del papel escrito para la señora madre del niño, se hubiera exigido al reo, y se hubieran examinado á las personas de la casa de Belfort, absolutamente ningún escrúpulo podría quedar en el ánimo del que suscribe, al pedir que no se otorgue el amparo, supuesta la confesión del desgraciado joven José Emilio Reynoso, de ser el autor exclusivo del plagio de su tierno sobrino administrada con las otras pruebas que lo corroboran; pero esos vacíos que se notan en la averiguación, el C. Juez los estimará en todo el valor que jurídicamente tienen, y al que suscribe, no pueden menos que alejarle el espíritu sobresaltado é intranquilo, cuando por otra parte la sentencia tiene su base fundamental en la ley que suspendió para los reos de esa clase de delitos, las garantías que con ella considera violadas el defensor que interpone el recurso.

En efecto, precisamente las garantías consignadas en los artículos 20, 21, y 23, de la Constitución son las que suspendió la ley de 9 de Abril del año próximo pasado, ó

mas propiamente, fueron suspendidas las que se expresan en el artículo 1º de esa ley, y se consignó en el 2º, que el delito de plagio está comprendido en la pena que designa la 2ª parte del artículo 23 de la Constitución.

Respecto de este artículo 23 de la ley, surge, "por los términos en que está concebido," una cuestión, cual es: si esta disposición por su texto literal tiene un carácter permanente ó es declaración transitoria por encontrarse incrustada, por decirlo así, en una ley de período fijo y determinado, como lo demuestra el mayor contenido de ella misma. El que suscribe cree, que bajo cualquier aspecto de los indicados que se considere, habiéndose perpetrado el delito, juzgado y sentenciado dentro del tiempo de la vigencia de la ley, su aplicación, aun torturando los mas humanitarios sentimientos y las fibras mas delicadas del corazón, es clara y natural.

Mas en este escepcionalísimo caso en el que por desgracia, hasta los incidentes que han ocurrido vienen á embarazar la acción ordinaria y expeditiva de este 2º Juzgado de Distrito, por el informe que ha rendido el C. Gobernador, aparoce que ya cuando se ocurrió á él, habia sido denegada la suspensión de la ejecución de la sentencia por el Juzgado 1º ante quien con anterioridad se ocurrió con la misma solicitud. A ser esto un hecho, como lo hace presumir el tono con que se expresa el informe del C. Gobernador, las determinaciones de V., C. Juez 2º, adolecen de nulidad por haber prevenido en el conocimiento del mismo negocio al C. Juez 1º, cuyos actos no están en las facultades de V. revocar, enmendar, ó de algun modo modificar, sin chocar abiertamente con el principio jurídico de que á nadie se le puede juzgar dos veces por una misma causa, y á esto equivale, que habiendo resuelto el Juzgado 1º sobre un mismo recurso, la determinación que á él haya dictado V., resolveria también en el mismo ó en sentido diverso, cualquiera que este fuera, so-

bre el mismo negocio. Así es que, en obsequio de la legitimidad de las resoluciones ulteriores que V. tenga que dictar, y en obsequio también del desgraciado reo, cuyos sufrimientos se exsacervan y se prolongan con las complicaciones que surgen de tales incidentes, y en acatamiento riguroso de la ley, es preciso se pida informe especificado y con la debida comprobación sobre lo que haya pasado en ese punto, para que los actos de V. y aun las promociones del que suscribe, no se resientan de nulidad, con perjuicio del mismo reo, que está expuesto á los efectos de determinaciones en sentido contrario, y hasta el prestigio de la autoridad y la ley, se menoscabarian con ese dualismo de jurisdicción en un mismo recurso de amparo.

Por estas consideraciones, el suscrito Promotor, pide que antes de que se provea el auto, sobre lo principal de este pedimento, en cuanto á que no procede el amparo, se esclarezca con la brevedad que el caso reclama, si en efecto el C. Juez 1º de Distrito, ha dictado alguna providencia sobre este recurso, en cuyo caso creo, como llevo expresado por la representación que me corresponde, que V., ó mas bien dicho, este Juzgado 2º, carece de jurisdicción para conocer de este juicio; pero si apareciere que el C. Juez 1º no ha prevenido en el mismo juicio, desde luego, en obvio de demoras por la gravedad del caso, reproduzco las razones que tengo expuestas para pedir que no se otorgue el amparo, porque no procede, decretando V. la resolución que corresponda conforme á justicia.

México, Abril trece de mil ochocientos setenta y uno. (Firmado.)—*Francoisco G. Moctezuma.*

Otro auto del Juez 2º de Distrito.

México, Abril trece de mil ochocientos setenta y uno.

En vista del informe que ha rendido el

C. Juez 1º de Distrito y del cual aparece que previno en el conocimiento del presente juicio de amparo; por lo que además de no tener competencia el que suscribe para continuar conociendo de él, las actuaciones y procedimientos practicados hasta ahora deben reputarse nulos y de ningún efecto; por tales razones y teniendo presente lo ya determinado ó prevenido expresamente por la Suprema Corte de Justicia, en cuanto á que no deben formarse artículos en los procedimientos de estos juicios, sino de plano resolverse en las declinatorias de jurisdicción ó incompetencias.

Se declara: que el presente Juez es incompetente para seguir conociendo en el juicio de amparo promovido á favor del reo Emilio Reynoso, y que las actuaciones y providencias dictadas son de reputarse nulas, debiendo en consecuencia y supuesto lo prevenido en los artículos 25 y parte final del 13 de la ley de 20 de Enero de 1869, remitirse el expediente á la Suprema Corte de Justicia, y por cuanto á que aparece que el C. defensor del reo quejoso, Lic. Juan José Baz, ha procedido en el caso, si bien con un fin laudable, cual ha sido el de salvar la vida de su defenso, sin embargo con irregularidad, pues habiendo obtenido denegación á su ocursio por el C. Juez 1º ocurrió posteriormente al que suscribe, ocultando este hecho, de tanto mas interés, importancia y conveniencia, cuanto que dió lugar á la improcedencia é irregularidad de las providencias y actuaciones, y pudo ocasionar otros males de mayor trascendencia; con arreglo á las facultades que á los Jueces concede la ley (artículo 167 de la ley de 4 de Mayo de 1857), se impone al Lic. C. Juan José Baz una multa de doscientos pesos que será enterada en la Tesorería General, tan luego como sea notificado para ella.

Lo proveyó y firmó el C. Lic. José M. Canalizo, Juez 2º de Distrito; doy fé—(Firmado.)—*José M. Canalizo.*—*Inocencio Santaella*, secretario.

Auto de la Corte Suprema de Justicia, en las actuaciones de los Juzgados 1º y 2º de Distrito que se remitieron para la revision correspondiente.

México, Abril quince de mil ochocientos setenta y uno.

Primero: Se confirma el auto de 13 del corriente, del Juez 2º de Distrito de México, en cuanto á su inhibicion de conocer en el recurso de amparo interpuesto por los defensores de José Emilio Reynoso.

Segundo: En consecuencia remítanse las actuaciones originales al Juez 1º de Distrito de México, para su acumulacion en dicho juicio de amparo.

Comuníquese este auto al Juez 2º para su conocimiento.

Así lo decretaron por unanimidad de votos respecto del primer punto, y por mayoría respecto del segundo, los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—(Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*L. Guzman.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo once de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

Auto del Juez 1º de Distrito escusándose de seguir conociendo en el juicio de amparo á que se refieren las constancias precedentes.

México, Abril quince de mil ochocientos setenta y uno.

Teniendo presentes los términos del auto pronunciado en esta fecha por la Suprema Corte de Justicia, que á la letra dice:

“México, Abril quince de mil ochocientos setenta y uno.

Devuélvase este expediente al Juez 1º de Distrito para que sustancié el recurso con arreglo á la ley de amparo, y lo remita á esta Corte cuando se halle en estado”. Estando convencido el Juez que suscribe de que no puede revocar por contrario imperio su auto de 10 del actual, en el que denegó la suspension de la ejecucion de la pena impuesta á José E. Reynoso por el C. Gobernador del Distrito; que dicho auto no ha sido revocado por la Suprema Corte, y de sustanciar el juicio de amparo, este Juzgado tendria que conocer en un negocio en el que ha externado su opinion, pues en el auto citado se dijo: *que no hay ni violacion presunta de garantías;* y que de conocer del juicio, sin la prévia revocacion del repetido auto, obraria en contra del tenor de la ley de 20 de Enero de 1869; por lo expuesto y con arreglo á los artículos 144 y 153 de la ley de 4 de Mayo de 1857, el Juez que suscribe se excusa de conocer en este juicio.

Remítanse estas diligencias al Juzgado 2º de Distrito, y publíquese este auto por la prensa oficial.

Así lo mandó y firmó el C. Juez 1º de Distrito, á horas que son las seis de la tarde: doy fé.—*Sancho.*—*Joaquín Sánchez Gonzalez.*

Es copia que certifico. México, Abril cinco de mil ochocientos setenta y uno.—*Joaquín Sánchez Gonzalez,* secretario.

Pedimento del C. Promotor fiscal del Juzgado 1º de Distrito.

Ciudadano Juez.

El Promotor dice: que ha examinado los presentes autos, y por su lectura y el estudio que ha hecho de ellos, tiene que sostener que es ilegal su intervencion, y que no está en las facultades del C. Juez la dene-

gacion arbitraria del Promotor que deba conocer en el juicio de amparo. La reseña del expediente es una comprobacion de nuestro acerto, y paso á hacer de él un ligero extracto. Sentenciado por el C. Gobernador el C. José E. Reinoso á la pena de muerte por el delito de plagio, ocurrieron sus defensores, los CC. licenciados Juan J. Baz, Gabriel Islas, José María Condés de la Torre y Fernando Ortega, al C. Juez 1º de Distrito, el dia 10 del actual, quejándose de que en la persona de su defendido se habian violado las garantías que otorga la Constitucion en sus artículos 20, 21 y 23, y pidiendo la suspension de la ejecucion que debia tener lugar por haber negado el C. Presidente de la República el indulto, como aparecia del oficio que presentaron. El C. Juez 1º, en el acto declaró, que no habian sido violadas las garantías reclamadas, por estar suspensas por la ley de 9 de Abril de 1870, y que no debia suspenderse la ejecucion, lo que inmediatamente se notificó á los CC. licenciados, Baz é Islas, defensores de Reynoso. Llevado el primero del celo que arrastra á un defensor solicitó, á salvar á todo trance á su defendido sin pararse en los medios, ocurrió al C. Juez 2º de Distrito, quien ignorante de que el C. Juez 1º de Distrito habia prevenido en el conocimiento, acordó la suspension de la ejecucion de Reynoso, y continuando los procedimientos del juicio de amparo, al pedir el informe de la ley y el C. Gobernador al evacuarlo, vino llamando su atencion sobre que el C. Juez 1º habia prevenido en el conocimiento, declarando en sentido contrario á su resolucion en el punto de la suspension. Sabedor el C. Juez 2º de este hecho, se abstuvo de continuar en los procedimientos, y remitió sus actuaciones á la Suprema Corte de Justicia, quien en su vista y de lo practicado por el C. Juez 1º, acordó:

Primero: que se confirmaba el auto del C. Juez 2º de Distrito, en cuanto á la inhibicion del conocimiento del juicio; y segundo, que se remitieran las actuaciones al

C. Juez 1º de Distrito para su acumulacion en el juicio de amparo. Sobre este segundo punto debo llamar la atencion del Juzgado que no obran en autos las diligencias practicadas por el C. Juez 2º de Distrito, que deben tomarse en consideracion para obsequiar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

Recibido el juicio de la Suprema Corte por el C. Juez 1º de Distrito, considerando que habia externado su opinion, se excusó del conocimiento, y mandó se remitiesen las actuaciones al C. Juez 2º de Distrito, quien se declaró competente y mandó hacer saber la radicacion por auto del 16 á los defensores del rco y al señor Promotor de su Juzgado. Escusado el C. Juez 1º, fué á la vez recusado por los defensores, recurso que interpusieron tambien contra el C. Juez 2º, y por cuya recusacion pasó á V. el conocimiento como Juez 2º suplente. *de Distrito*, y declarándose competente, mando hacer la debida notificacion al C. Promotor del Juzgado 2º de Distrito.

Por auto del 18, se mandó nuevamente suspender la ejecucion, y que el C. Gobernador evacuara nuevo informe, lo que hizo repitiendo el que con anterioridad tenia dirigido al C. Juez 2º y obra en copia en la causa de Reynoso, fojas 44 á la 47; en este, funda que ha obrado conforme á la ley de 9 de Abril, la que en su artículo 1º suspende las garantías otorgadas por la Constitucion, en la parte 1ª del artículo 13, 1ª del artículo 19, y los artículos 20 y 21, y que por el artículo 3º de la ley, se impone la pena de muerte á los plagarios, la que se les aplicará por la autoridad, cuyos agentes hayan hecho la aprehension, juzgándoseles sumariamente, todo lo que tuvo lugar con Reynoso, segun la causa respectiva; que habia dado cuenta con el fallo al C. Presidente, para que si tenia á bien lo indultara, y que esto le fué denegado conforme al oficio de fojas 32. En este último auto, se declara nulo todo lo actuado, y dándose principio al juicio, se excluye de oficio y solo

porque así cuadró al C. Juez, al C. Promotor 2º, mandando que la notificación se entendiera con el Promotor del Juzgado 1º de Distrito. Es una verdad reconocida por el Juzgado, y que confirman las anteriores palabras: *Promotor del Juzgado 1º de Distrito*, que hay dos Promotores, cada uno adscrito á determinado Juzgado, supuesto que hay Juzgado 1º y Juzgado 2º de Distrito. Pues bien; si la ley de 8 de Diciembre que creó un nuevo Juzgado de Distrito, con su Promotor especial é independiente del Promotor del Juzgado 1º le dió adscripcion, ¿con qué derecho, V., que es Juez 2º suplente de Distrito, viene eliminando al Promotor nato del Juzgado, llamando á otro que no tiene autorizacion legal para ser parte en ese Juzgado? La ley dice, que conocerán los Juzgados á prevencion, y en la palabra *Juzgado*, comprende su personal, y de otra manera seria grande la confusion y grandes los trastornos, y la razon es obvia; el Juzgado 2º se creó para expeditar la administracion de justicia; y con esa confusion no se lograria sino entorpecerla. Para la buena marcha de todo, la base es el orden; pero en la administracion de justicia, es el ser, y es por esto muy extraño que por un Juez se abandone este principio, que para nadie mas que á él es perfectamente perceptible, como lo ilustrará un ejemplo. Los Juzgados de lo criminal tienen las mismas atribuciones y el mismo personal, y pregunto al C. Juez 1º de lo criminal, ¿se cree autorizado el C. Juez para eliminar por su voluntad á su Secretario y llamar á cualquiera de los de la misma clase de otro Juzgado? No, porque á ello se opone la adscripcion, es decir, la recta administracion de justicia, el orden, y si esto no cabe en secretarios que todos obran de una misma manera, pues su única mision es autorizar, ¿podrá ser posible, en funcionarios de la categoría de los Promotores que pueden pensar de diversa manera, asentar contrarios pedimentos, y que no pueden considerarse máquinas que tienen que funcio-

nar del mismo modo? El C. Juez da por fundamento de su auto del 20, que no hay ley para que recusado un Juez, se entienda que lo está un Promotor; es esacto que este no puede ser recusado, pero inhíbido un Juez, inhíbe al personal de su Juzgado, y así lo practica el Juzgado, pues recusado V. no continúa la causa en el Juzgado; sino que se sigue ante el Juzgado que debe sucederle, y con su personal. El C. Juez para que se me tenga por parte, cree salir del paso con decir que asume la responsabilidad sobre la ilegalidad de los procedimientos, pero esto no cabe, pues si existe responsabilidad personal, no procede la transmision, ni es posible que á voluntad de los cómplices, uno solo pueda recibir la pena librando al otro de la ley, solo porque así se convinieron. Reconozco las eminentes cualidades que adornan al C. Juez 1º de lo criminal, su saber, ilustracion y buena fé, y si no alcanzo á las primeras, sí le igualo con evidencia en la última, y si considero con lealtad, (aunque quizá siendo el equivocado) que es un error el que quiera por la fuerza oirse mi parecer, ¿podré darle contra mis convicciones, cuando se trata de la vida de un hombre? Esto no puede exigirlo un Juez, y ménos cuando se trata de comprobar que hay un recurso como el de amparo, que es la egida del simple ciudadano contra el poder cuando no se excusa con la ley.

Lo expuesto, deseo que se considere por el C. Juez, para que sin entorpecer el juicio que debe seguir bajo de los trámites terminantes y perentorios que marca la ley de 20 de Enero, se entiendan las diligencias con la parte legítima, y lo que cabe, pues siendo la mira de la Suprema Corte de Justicia que se sustancié el juicio con arreglo á la ley, procede el que se observen todos los trámites con la ampliacion que concede la ley en su artículo 10 para el mejor conocimiento del Juzgado, y para que los defensores estén al tanto de lo actuado, todo lo que repito, el Juzgado debe hacerlo saber al C. Promotor 2º de Distrito, con quien debe entenderse en el presente juicio.

México, Abril veintiuno de 1871.—*Herrera Campos.*

*Otro pedimento del C. promotor fiscal
del Juzgado 2º de Distrito.*

Ciudadano Juez:

El Promotor nato del segundo Juzgado de Distrito, dice que en obsequio de la pronta administración de justicia y deseando no enervar por su parte, con insidentes como el que ha suscitado el C. Promotor del Juzgado 1º de Distrito, rehusándose á estender el pedimento para el que se le mandó entregar el informe del C. Gobernador de Distrito con las constancias respectivas, en virtud del auto que así lo previno, conforme con lo dispuesto en la segunda fracción del artículo 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, y hacer mas complicada la secuela de este juicio de amparo, el que suscribe se concretará á dos puntos en este pedimento, para que ya que se presenta esta oportunidad, la Suprema Corte de Justicia resuelva, y se tenga una ejecutoria que sirva de norma ó de base en lo futuro, respecto del Promotor á quien corresponda representar los intereses que son inherentes á su oficio, cuando como en el presente caso están imbuidos los dos Juzgados de Distrito.

El primero de esos dos puntos indicados consiste, supuesto el contenido del auto de fecha de ayer, en el que el C. Juez establece por fundamento para que al infrascrito Promotor se le pasen estas aclaraciones, que siéndole al C. Juez del todo indiferente, que para la legalidad de sus actos pida uno á otro de sus Promotores, consiste en que se resuelvan las cuestiones siguientes: ¿La escusa del C. Juez 1º de Distrito es trascendental á su Promotor de una manera tan absoluta, que como lo pretende éste, queda eliminado para ejercer su oficio en el mismo negocio en que la persona física del C. Juez 1º se escusó? ¿Rehusado el Juez 2º, se enten-

dera inhibido todo este juzgado incluso el Promotor que le está adscrito, ó este es el único á quien no se hace extensiva la inhibición, supuesto que el negocio, sea civil ó criminal, pasa á otro juzgado del ramo para que ante él prosiga su secuela? ¿Radicados los autos ante un Juzgado de lo civil ó de lo criminal en su caso, teniendo cada uno de estos ramos el abogado defensor del fisco, y los Promotores de los Juzgados de lo criminal, no pueden y deben y el uno, el abogado defensor, y los otros, desempeñar las funciones del Promotor del Juzgado de Distrito, cuando ha sido inhibido de conocer en un negocio? Cualquiera que sea la solución que la Suprema Corte tenga á bien dar á las cuestiones indicadas, vendrá á establecer cuando menos, un precedente, con el prestigio del elevado puesto en que la Constitución ha colocado á ese Tribunal Supremo de la Nación.

El segundo punto, se contrae á pedir sobre lo principal respecto del amparo que han solicitado los defensores del reo José Emilio Reynoso. En cuanto á esto, como de hecho y de derecho las resoluciones que ha dado la Suprema Corte de Justicia, mandando que se acumularan las actuaciones del Juzgado 2º de Distrito á las formadas por el primero para que sustanciara el recurso, se le ha dado entrada á éste, y una vez iniciado el juicio, tiene que seguir los tramites que están marcados por la ley hasta que realmente la misma Suprema Corte conceda ó niegue el amparo, bien confirmando la sentencia del Juez que lo otorgue ó revocando la que lo niega, ó vice versa; y como en las actuaciones del 2º Juzgado de Distrito que se mandaron acumular, obra un pedimento del que suscribe en el cual ha expuesto las razones por las cuales cree que no es de otorgarse el amparo, por que la sentencia del C. Gobernador del Distrito contra la cual se interpone no importa la violación de las garantías constitucionales á que se refieren los defensores de Reynoso; pues que como tiene expuesto el que sus-

cribe, esas garantías estaban suspensas por la ley 9 de Abril del año próximo pasado, conforme á la cual y durante su vigencia se cometió el delito de plagio y fué juzgado y sentenciado.

Por estas razones, y refiriéndose á las que tiene expresadas en la parte conducente de su pedimento de trece del corriente que obra á fojas 3, 7, 8, y 9. del enaderno de las actuaciones del Juzgado 2º de Distrito, el Promotor pide no se otorgue el amparo interpuesto por los defensores del reo José Emilio Reynoso, por no estar violadas las garantías en que lo fundan, pues que estaban suspensas por disposicion legal expedida por el Congreso de la Union para los ejecutores del delito á que se refiere la repetida ley de 9 de Abril del año próximo pasado.

México, Abril veinte y tres de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado.)—*Francisco G. Moctezuma.*

Tercer pedimento del C. Promotor fiscal del Juzgado 2º de Distrito.

C. Juez.

El promotor que suscribe, á quien por disposicion de V. se le corrió el traslado del ocurso de los defensores del reo José Emilio Reynoso que interpusieron el recurso de amparo contra la sentencia del C. Gobernador del Distrito que lo condenó á la última pena, por el crimen de plagio, y del informe justificado rendido por esa autoridad por haberse rehusado el Promotor del Juzgado 1º de Distrito á evacuarlo, supuesto el estado del juicio que es el de alegar, haciéndolo en la forma prescrita por la ley, dice: que la justificacion de V., se ha de servir declarar que la justicia federal no ampara ni protege al reo José Emilio Reynoso, por no haber sido violadas en su persona las garantías constitucionales que expresan los defensores en su ocurso, en vista

de las constancias que obran en autos y de las razones que para á exponer de la manera mas precisa, supuesto que ya en los dos pedimentos que ha hecho, tiene consignados los fundamentos capitales en cuya virtud cree que el amparo no es de otorgarse.

Siñéndose el C. Juez en sus proveidos dentro de las facultades que la ley le confiere, y con presencia de la causa que el C. Gobernador del Distrito acompañó á su informe, no estimó necesario esclarecer con nuevas pruebas, ninguno de los hechos que obran en la causa, y llevando el presente juicio por su orden natural, se encuentra ya en estado de citar para sentencia, tomando en consideracion, además de las constancias del proceso, el informe de la autoridad y lo pedido por el Promotor, las nuevas razones que éste y la parte que interpuso el recurso le presenten alegando en defensa cada uno de sus derechos en la parte que les corresponde. Por lo que afecta á la observancia de los preceptos constitucionales, en los artículos del Código fundamental que se consideran vulnerados, el que suscribe, no hará otras reflexiones mas que las que naturalmente se desprendan de los mismos hechos que constan comprobados en las causales que sirven de motivo á la queja.

¿Cuáles sean esos motivos que se aducen para implorar el amparo? El mismo escrito en que se solicita, los concreta á la violacion de tres artículos de la Constitucion, que especifican: el primero de estos, el 20, las garantías que en todo juicio criminal debe tener el acusado para que se le juzgue; el segundo, el 21, designa la autoridad á quien compete la imposicion de las penas; y el tercero, el 23, califica la categoría de los delitos que merezcan la pena capital.

Pues bien, en cuanto al primer punto, la cuestion se reduce, como en los otros, á saber si en la sustanciacion de la causa han dejado de observarse sustancial, ó mas propiamente, en la esencia, los preceptos constitucionales.

¿Acaso no supo Reynoso el motivo por que se le juzgaba? ¿No se le tomó su declaración preparatoria dentro de las cuarenta y ocho horas inmediatas á la aprehensión?

¿Se omitieron en la causa los careos con los testigos? ¿No se le escuchó en el derecho de defensa? A todas estas preguntas contesta satisfactoriamente la averiguación practicada por el Gobierno del Distrito, para esclarecer, tanto la perpetración del delito, como el conocimiento de su auto, conforme á las facultades que una ley le había conferido.

Respecto de la segunda cuestión, queda también resuelta, con solo tener presente, que una ley en vigor y preexistencia al delito, conforia á esa misma autoridad la jurisdicción bastante, y le daba el carácter necesario para poder imponer una pena propiamente tal, bien especificada por la ley de 9 de Abril del año último, que fué dictada y expedida por el Congreso de la Unión en el uso legítimo y natural de sus facultades.

Finalmente, la tercera cuestión, que en sí misma es de mayor gravedad, consiste en averiguar si el delito puede estar ó no comprendido en la 2ª parte del artículo 23 de la Constitución.

Para esto, además de las consideraciones que se desprenden sin violencia del carácter idéntico y aun mas grave que tiene de los que en el texto constitucional se expresan, hay que recurrir al espíritu, al instinto, si aun esta fuerza es necesaria, de la filosofía de la ley; hay que considerar que en el termino trascurrido desde el año de 1861 hasta el presente, tres congresos distintos han sido enteramente conformes en declarar comprendido el plagio entre los delitos á los cuales, la fracción 2ª del artículo 23 de la Constitución, impone la última pena, como lo demuestran las leyes de 3 de Junio de 1861, 13 de Abril de 1869 y 9 de Abril de 1870.

Esta consideración por sí sola es tan con-

cluyente, cuanto que la observancia de las leyes mencionadas ha sido general en toda la República donde se han presentado casos para aplicarla, de manera que han tenido no solo la aquiescencia de los poderes de los Estados sino la sanción práctica de la aplicación que de ella se ha hecho para juzgar y sentenciar á los reos del delito de plagio.

Pero hay además otra circunstancia para que las garantías constitucionales no se consideren violadas, cual es que han estado suspensas para los autores ó perpetradores de ese delito, y por lo mismo, bajo ningún aspecto puede decirse que se infringe, se viola ó se quebranta, lo que no existe, lo que está suspenso, lo que en virtud de una ley ha sido restringido.

Por estas razones, el que suscribe, cree haber demostrado que, contra los procedimientos practicados por el C. Gobernador del Distrito, en el juicio á que fué sometido José Emilio Reynoso y la sentencia que lo condenó, así como contra la pena que se le impuso: no cabe el amparo, en consecuencia, es de denegarse el recurso interpuesto por sus defensores, por lo que el Promotor pide en conclusión, como tiene manifestado al principio, que V. se sirva declarar que la Justicia federal no ampara ni protege al referido Reynoso contra los procedimientos y la pena de que se quejan sus defensores.

México, Mayo dos de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado.)—Francisco A. Moctezuma.

*Sentencia del Juez 1º de lo criminal
jungiendo por la ley como Juez
de Distrito.*

Juzgado 1º del ramo criminal.—México, Mayo cuatro de mil ochocientos setenta y uno.—Visto este recurso de amparo interpuesto por los defensores del reo José Emilio Reynoso, á virtud de reputar violadas en la persona de éste las garantías que otorgan

los arts. 20, 21 y 23 de la Constitucion, con motivo de la sentencia de muerte pronunciada por el gobernador del Distrito, el día 8 de Abril próximo pasado, y por creer inconstitucional la ley de 9 de Abril del año anterior, expedida contra los plagiarios y salteadores de camino. Vista la resolucio de la Suprema Corte, por la que se mandó sustanciar el recurso de amparo con arreglo á la ley; la excusa del Juzgado 1º de distrito para conocer en este recurso, por haber externado su opinion al denegar de plano el amparo que ante él se solicitó; la declaracion del Juzgado 2º de Distrito, dándose por recusado sin remitir los autos al superior para que calificase la causa alegada, fundándose en la prevencion de la Suprema Corte para que en esto juicios no se sustancien artículos, sino que se resuelvan de plano; la declinatoria de jurisdiccion opuesta á este Juzgado por los defensores de Reynoso; el informe del gobernador del Distrito; el pedimento del promotor fiscal del Juzgado 2º de Distrito y sus apuntes de alegato, con lo demás que ver convino. Considerando:

Primero. Que el Juzgado 2º de Distrito, al resolver de plano sobre la recusacion que se le hizo, obró conforme al espíritu de la ley de 20 de Enero de 1869, que en su art. 24 ordena, que los términos establecidos por ella sean perentorios, y su simple lapso sin causal bastante justificada constituye responsabilidad, siendo además una práctica constante que en estos juicios no se admita recurso de ningun género, y que una vez admitida la recusacion obró conforme á la ley de 4 de Febrero de 1862, remitiendo á este Juzgado 1º de lo criminal el expediente relativo, puesto que tratándose de un amparo en causa criminal, el incidente debe tener el mismo carácter.

Segundo. Que no es cierto que la ley de plagiarios sea inconstitucional porque con ella se violen las garantías y principios de defensa que establecen los art. 20, 21 y 23 de la Constitucion, como dicen los defensores del reo; pues que dicha ley ha suspendido

las garantías citadas por un tiempo determinado y para cierta clase de criminales, cuales son los plagiarios y salteadores de camino, y solo podría decirse anticonstitucional, si se hubiesen borrado absolutamente del Código fundamental dichas garantías de las que no se ha privado á Reynoso, puesto que se le han concedido todas las del art. 20 de la repetida Constitucion, otorgándole los medios de defensa apetecibles.

Tercero. Que el reo José Emilio Reynoso, fué aprehendido, juzgado y sentenciado con arreglo á la repetida ley de 9 de Abril del año anterior dentro del plazo fijado por la misma en su artículo 7º para la duracion de suspension de garantías, puesto que, la sentencia se pronunció el día 8 de Abril próximo pasado, y si no tuvo verificativo la ejecucion, fue en virtud de los recursos otorgados en favor del propio reo.

Por todas estas consideraciones y con fundamento de las leyes de 4 de Febrero de 1862 y 20 de Enero de 1869, se declara:

Primero. El presente Juez ha sido competente para conocer del recurso de amparo interpuesto por los defensores de José Emilio Reynoso.

Segundo. La justicia de la Union no ampara ni protege á este reo.

Tercero. Hágase saber esta sentencia, y remítase á la Suprema Corte de Justicia para los efectos de la ley; y con ella copia al periódico oficial para su publicacion.

Así lo proveyó el C. Juez primero de lo criminal, Lic. Ignacio Villava, actuando como Juez de Distrito por ministerio de la ley, y lo firmó.—Doy fé.—*Ignacio Villava.*—*Ignacio A. Torcida.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido por los defensores de D. José Emilio Reynoso,

contra el C. Gobernador del Distrito que le impuso la pena de muerte por el plagio del niño Manuel Mangino y Reynoso, cuyo juicio continuó el C. Lic. Ignacio Villava, Juez 1º del ramo de lo criminal de esta ciudad, en calidad de Juez de Distrito, por escusa del Juez 1º de Distrito, y por recusación con causa del Juez 2º del propio ramo, admitida de plano por el mismo. Considerando, respecto de la jurisdicción con que ha procedido, en calidad de Juez de Distrito el 1º del ramo de lo criminal, que ella procede de la ley de cuatro de Febrero de mil ochocientos sesenta y dos: Considerando, respecto del punto relativo al amparo que se motiva en la violación de las garantías á que se refieren los artículos 20, 21, y 23, de la Constitución federal, que suspensas por la ley de 9 de Abril de 1870, á la cual se sujetó el C. Gobernador del Distrito al encausar y sentenciar á D. José Emilio Reynoso, no pueden decirse violadas en la persona de éste; pues por lo mismo de estar suspensas, no se disfruta de ellas, y no puede decirse que hay violación de garantías de que no se disfruta, y por consiguiente, que el C. Gobernador del Distrito ha procedido en el caso dentro del círculo de sus atribuciones. Se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el día 4 del presente y año, por el C. Lic. Ignacio Villava, Juez 1º del ramo de lo criminal de esta ciudad, funcionando como Juez de Distrito, que dice: "primero; el presente Juez ha sido competente para conocer del recurso de amparo interpuesto por los defensores de José Emilio Reynoso. Segundo; la justicia de la Unión no ampara ni protege á este reo."

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos respecto del primer punto y por mayoría respecto del segundo, los C. C. Presi-

dente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*L. Guzman.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo once de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, Oficial Mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por los sentenciados á muerte y no indultados, Juan Ortiz y Gregorio Rodríguez.

SENTENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO.

Zacatecas, Abril quince de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el despacho telegráfico de Somborette recibido el día de ayer á las ocho y media de la noche, en el que el defensor de los reos Juan Ortiz y Gregorio Rodríguez solicitan amparo pidiendo se suspenda la ejecución de la pena del último suplicio á que fueron condenados, por habérseles negado la gracia de indulto y tener pruebas suficientes que acreditan la honradez y honrra de bien de sus representados. Considerando: que en la petición del defensor F. Martínez no se expresa que en el juicio seguido contra los reos Ortiz y Rodríguez se hayan violado las garantías individuales; que en la misma solicitud ni se expresa la naturaleza del delito por el cual han sido condenados sus defensos, ni si la autoridad que los ha juzgado ha sido ó no competente, ó un Tribunal especial: que en la peti-